

## Trabajo y pobreza: virtudes y desafíos de la posconvertibilidad\*

*Mariano Barrera, Ana Laura Fernández y Pablo Manzanelli\*\**

En el marco de la denominada posconvertibilidad, la economía argentina transitó un período de elevadas tasas de crecimiento, signadas por el impulso de los sectores productores de bienes. Ello marcó un fuerte contraste -aunque no el único- respecto a los años noventa. Otra diferencia de no menor relevancia se puso de manifiesto en la acelerada generación de puestos de trabajo, lo cual permitió volver a tasas de desocupación de un dígito a finales de 2006, luego de haber alcanzado a más del 20% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el peor momento de la crisis que marcó el fin de la Convertibilidad (datos correspondientes al año 2002). Incluso, posteriormente, se redujo hasta alcanzar una tasa del 7,6% en el tercer trimestre de 2012.

La fuerte creación de empleos estuvo sesgada, a su vez, hacia empleos plenos (es decir, jornadas de más de 35 horas semanales) y registrados en el sistema de seguridad social, apreciándose una importante reducción de la tasa de subocupación. Según los últimos datos disponibles, dicha tasa representa al 8,9% de la PEA. A su vez, esta etapa se caracterizó por un incremento en la proporción de empleos registrados en el sistema de seguridad social: esto es, crecieron en mayor medida los puestos de trabajo cubiertos por la legislación laboral y la negociación colectiva, producto de la incorporación de nuevos trabajadores como, así también, del “blanqueo” de otros puestos. Estos empleos se caracterizan por ser más estables y por brindar a los trabajadores ingresos más altos, al asegurar un piso dado por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y estar regulados por la negociación salarial. Además, les aseguran el acceso a una obra social, al sistema previsional al momento del retiro y un seguro de desempleo en caso de ser despedidos. Sin embargo, es importante destacar que, si bien el porcentaje de asalariados no registrados se redujo drásticamente pasando del 49,2% de los asalariados a mediados de 2003 al 34,5% a mitad de este año, es aún muy significativa la cantidad de trabajadores que no se encuentran amparados por las instituciones laborales y enfrentan situaciones de alta precariedad.

Estas mejoras en el ámbito laboral, producto de la propia dinámica económica, estuvieron apuntaladas por una revitalización de la negociación salarial y por políticas que apuntaron a mejorar la situación de los trabajadores tanto en actividad como retirados. Entre ellas se cuentan las políticas de incrementos de ingresos a los trabajadores del sector privado a la salida de la crisis, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y su sostenimiento a lo largo del tiempo a partir de la convocatoria anual a la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la mencionada recuperación de la negociación salarial, la implementación de políticas tendientes a reducir la no registración en ciertos sectores, la Ley de Movilidad Jubilatoria y las

---

\* Artículo publicado en la revista *Autogestión. Debates urgentes para otra economía*. Año 1, Nro. 2.

\*\* Investigadores de CIFRA-CTA.

moratorias previsionales, la extensión del sistema de asignaciones familiares a través de la Asignación Universal por Hijo.

Todos estos factores, y la reducción del “ejército de reserva”, contribuyeron a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que se habían contraído significativamente por los efectos de la megadevaluación de 2002 (caída que alcanzó al 30% de los salarios reales). Sin embargo, el poder de compra de los salarios sólo alcanzó, a principios de 2007, los niveles previos a la crisis. Lo propio cabe para los ingresos de las familias, junto con una importante mejora en su distribución.

Estas tendencias globales deben, sin embargo, matizarse debido a ciertos factores que dificultaron en algunos períodos la creación de empleo –sostenida en parte por la acción estatal- y el aumento de los ingresos: la persistencia de ciertos legados críticos del neoliberalismo (las dificultades por avanzar en la reconfiguración de la estructura industrial, el elevado nivel de concentración económica, etc.), los coletazos de la crisis internacional y la aceleración de la inflación a partir de 2007.<sup>1</sup>

### **Importantes mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias**

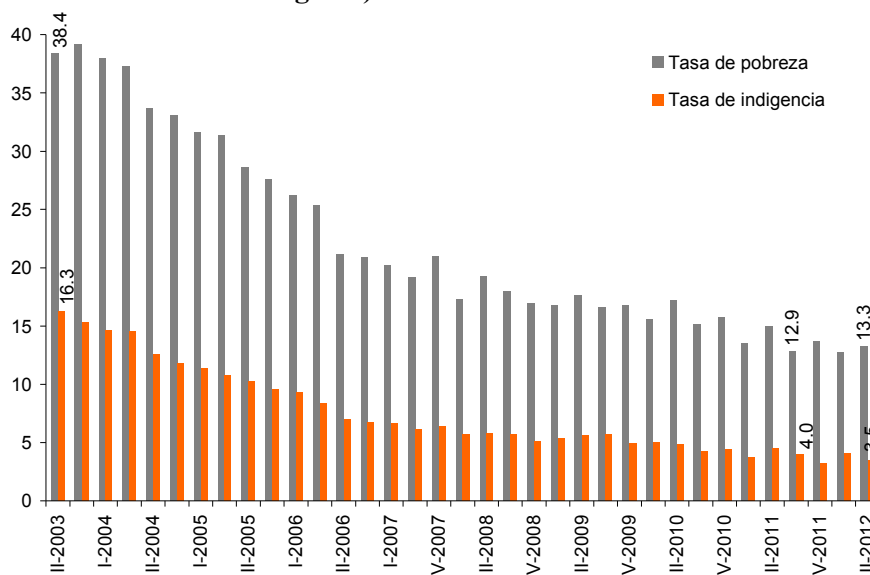
La recuperación del empleo y los ingresos y la reducción de la desigualdad tuvieron como consecuencia importantes mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Una forma de evaluar esto es a partir de los indicadores de pobreza e indigencia. Las tasas de pobreza e indigencia muestran el porcentaje de hogares o personas (en relación con el total) cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta (la Canasta Básica Alimentaria en el caso de la indigencia o la Canasta Básica Total en el caso de la Pobreza). Estas canastas, a su vez, representan el costo de adquirir –a través del mercado- determinados bienes y servicios que son considerados básicos para la satisfacción de las necesidades de las familias. Para obtener estos valores es necesario utilizar datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Debido a la falta de credibilidad del IPC elaborado por el INDEC, se utilizó el IPC-9 provincias elaborado por CIFRA a partir de los datos oficiales provenientes de Direcciones Provinciales de Estadística de nueve provincias.

En el gráfico se muestra la evolución de las tasas de pobreza de hogares y personas entre 2003 y 2012. Como puede observarse, ambos indicadores muestran una fuerte tendencia decreciente hasta el año 2007, a partir del cual se aceleró el ritmo de aumento del nivel general de precios, seguido por el primer impacto de la crisis internacional en 2008. Sin embargo, aunque a tasas menores, la pobreza siguió su derrotero decreciente, de manera que pasó de aquejar al 38,4% de los hogares (49,4% de la población) en el tercer trimestre de 2003 a afectar al 13,3% de los hogares (19,9% de la población) en el segundo trimestre de 2012. Es decir, las tasas de pobreza se redujeron entre esos años un 65,4%, si se consideran hogares, y un 59,8% si se consideran personas.

---

<sup>1</sup> Para un análisis más detallado de este tema, véase el artículo “La posconvertibilidad y los coletazos de la crisis mundial” en el primer número de esta revista.

### Evolución de las tasas de pobreza e indigencia (en porcentajes sobre el total de hogares). III-2003 – II-2012.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) y Direcciones Provinciales de Estadística.

En el caso de las tasas de indigencia, la evolución es similar: la proporción de hogares cuyos ingresos no alcanzaban para adquirir la Canasta Alimentaria Básica era del 16,3% (22,5% de las personas) en 2003 y pasó ser del 3,5% (4,3% de las personas) en 2012.

Estas importantes mejoras son resultado, en primer lugar, de la mencionada dinámica virtuosa de la situación laboral: menos personas desocupadas, empleos de mejor calidad (lo cual está asociado a una menor inestabilidad laboral y de los ingresos), mayores salarios, menor desigualdad. A su vez, los incrementos en las jubilaciones y la implementación de la AUH contribuyeron a incrementar los ingresos no laborales de las familias. En el caso particular de la ampliación de la cobertura del sistema de asignaciones familiares, su efecto resultó importante ya que incluyó justamente a las familias que se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad (las familias de los desocupados y de los trabajadores informales), aunque dados sus montos, su impacto fue mayor sobre las tasas de indigencia que sobre las de pobreza.

Indudablemente, en esta etapa se lograron importantes avances en términos de las condiciones de vida de la población. Las oportunidades de seguir avanzando en este sentido siguen siendo importantes en la situación actual, de manera que no debe perderse de vista una cuestión fundamental: son aún muchas las personas que siguen viviendo en condiciones de pobreza (7,7 millones) y de indigencia (1,8 millones).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Es necesario aclarar que dada la información disponible, las tasas de pobreza e indigencia calculadas corresponden a los 31 principales aglomerados urbanos, es decir, en su estimación se excluyen las ciudades más pequeñas y las áreas rurales. La cantidad de personas para el total del país se obtuvo extrapolando estos datos bajo el supuesto de que la incidencia de la pobreza y la indigencia en las áreas para las que no se cuenta con información es igual a la que se puede estimar a partir de los datos disponibles.

## Un importante desafío pendiente

Luego de casi una década que puede caracterizarse en términos globales como de elevado crecimiento económico y fuerte recuperación en materia laboral, así como de relevantes avances en el ámbito de la seguridad social, resulta ineludible orientar las políticas públicas a atacar el problema de la persistencia de la pobreza y la indigencia. Para hacer estos datos más palpables, vale la pena destacar que las familias indigentes tienen ingresos menores al costo de una canasta compuesta por los alimentos que permiten a sus miembros cubrir las calorías necesarias para vivir. Es decir, si estos hogares destinaran todo su ingreso a comprar alimentos, cubrirían sus necesidades nutricionales, pero no les quedarían ingresos suficientes para pagar un alquiler, gastos de transporte, combustible (para calefaccionar la vivienda y cocinar los alimentos), vestimenta, etc. Además, el nivel de ingresos que debe alcanzar un hogar para no ser considerado pobre según esta metodología es relativamente bajo: si tomamos como ejemplo una familia compuesta por un varón y una mujer adultos, un adolescente y una niña, ésta será considerada pobre si su ingreso mensual es inferior a \$2.997 e indigente si su ingreso es menor a \$1.381.

En este escenario, interesa destacar que si bien el rol del empleo fue fundamental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, insertarse en el mercado de trabajo muestra no ser suficiente para sacar a las familias de la pobreza. En efecto, en el 61% de los hogares pobres el jefe está ocupado. Es decir, el desempleo no es la única causa que explica la persistencia de este fenómeno. En cambio, la calidad del empleo al que acceden los trabajadores es primordial: entre los jefes de hogares pobres que se encuentran ocupados, el 78,2% lo hace en puestos asalariados informales o en ocupaciones por cuenta propia. Estos empleos se caracterizan, tal como se mencionó, no sólo por la percepción de ingresos menores, sino por una alta inestabilidad, sumiendo a estas familias en una situación de profunda vulnerabilidad ante los vaivenes económicos (aunque también ante eventualidades como, por ejemplo, la enfermedad).

Por otro lado, el 27,9% de los jefes de hogares en situación de pobreza es económicamente inactivo (es decir, no trabaja ni busca empleo) y entre éstos, una amplia mayoría (el 67,8%) son mujeres, lo cual podría indicar que muchas de estas jefas de hogar no logran articular su vida laboral con las tareas asociadas al cuidado del hogar.

En definitiva, estos datos dan cuenta de la necesidad de profundizar las políticas activas tendientes a mejorar la calidad de los empleos –por ejemplo, a través de un mayor control de las unidades productivas- y la extensión de la cobertura de las instituciones laborales, así como la importancia de ampliar las políticas sociales que atiendan a las familias más vulnerables. Sin embargo, no debe perderse de vista que sus efectos serán sustentables en la medida en que se avance en un más activo proceso de reindustrialización, que torne más compleja la estructura fabril y cuya expansión se encuentre vinculada a la demanda interna de los sectores populares.